

ARTIGOS

Junior Ivan Bourscheid¹

La relación del liderazgo y las demandas legitimadoras de la precarización democrática paraguaya

The relationship of leadership and the legitimizing demands of Paraguayan democratic precariousness



RESUMEN:

Ese estudio busca comprender por qué las respuestas de Fernando Lugo a las demandas que pautaron la crisis de 2012 le sacaron del Ejecutivo nacional pero mantuvieron su espacio de liderazgo. Las cuestiones centrales abordadas se refieren al rol del liderazgo de Lugo y la centralidad de su figura en la política paraguaya desde 2008, para entender las dinámicas recientes del régimen democrático paraguayo a partir de la actuación de ese liderazgo. Para lograr esos objetivos el estudio utiliza las herramientas del análisis de discurso de una entrevista focalizada y en profundidad, semiestructurada con guion más cerrado, realizada con el expresidente Lugo. También se utiliza el análisis de discurso para algunos editoriales del periódico ABC Color, para ayudar a comprender las principales demandas surgidas en el escenario de la crisis de 2012. Otra herramienta metodológica usada es la estadística descriptiva, para datos sobre las relaciones de posesión de la tierra y sobre comportamiento político paraguayo. Será observado que las dos demandas que legitimaron la deposición de Lugo – seguridad y soberanía – y su forma de actuar – al buscar moderar y alejándose de respuestas de fuerza – resultaron contrarias a lo buscado por la coalición conservadora, posicionando Lugo como su principal opositor.

Palavras-chave: Fernando Lugo; Deposición; Opinión pública; Precarización democrática

ABSTRACT:

This study seeks to understand why Fernando Lugo's responses to the demands that led to the 2012 crisis removed him from the national Executive but maintained his leadership space. The central questions addressed refer to the role of Lugo's leadership and the centrality of his figure in Paraguayan politics since 2008, to understand the recent dynamics of the Paraguayan democratic regime based on the performance of that leadership. To achieve these objectives, the study uses the tools of discourse analysis of a focused and in-depth interview, semi-structured with a more closed script, carried out with former President Lugo. Discourse analysis is also used for some editorials of the ABC Color newspaper, to help understand the main demands that arose in the 2012 crisis scenario. Another methodological tool used is descriptive statistics, for data on land property ownership relationships and on Paraguayan political behavior. It will be observed that the two demands that legitimized the deposition of Lugo - security and sovereignty - and his way of acting - seeking to moderate and moving away from responses of force - were contrary to what was sought by the conservative coalition, positioning Lugo as his main opponent.

Keywords: Interrupção de mandato; Presidencialismo; América Latina; Anos 2010

¹ Doutor em Ciência Política pela Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil.

juniorbourscheid@gmail.com,  <https://orcid.org/0000-0002-9550-2032>

INTRODUCCIÓN

Las tensiones socioeconómicas y la inestabilidad político-institucional son características de los regímenes democráticos latinoamericanos contemporáneos. Nacidos de la superación de los regímenes autoritarios entre el final de la década del 1970 e inicios de la del 1990, esos nuevos regímenes – en general – superaron los temores iniciales de retroceso autoritario, sin embargo, coexistiendo con crisis recurrentes, manipulación de las instituciones de los regímenes y dificultad para satisfacer las principales demandas ciudadanas, tanto de las élites como de las masas (MUNCK, 2010).

Un caso ejemplar de los desafíos enfrentados por las democracias latinoamericanas es el caso del régimen paraguayo. Después de vivir una de las dictaduras más largas del siglo XX – bajo el mando del general Alfredo Stroessner entre mayo de 1954 y febrero de 1989 –, la primera experiencia realmente democrática de Paraguay convive con la falta de alternancia (de los 7 mandatos presidenciales hasta el momento, 6 siguieron en manos del Partido Colorado) y con las recurrentes crisis y violencia política (como en las crisis de 1996, 1999, 2000, 2012 y 2017) (BOURSCHEID y GONZÁLEZ, 2019).

En 2008 las esperanzas de cambios democráticos y recibimiento de demandas populares

por el gobierno fueron reavivadas con el ascenso de Fernando Lugo a la presidencia, al derrotar el oficialismo colorado y acercarse de los movimientos sociales, especialmente con el apoyo de los movimientos campesinos. No obstante, con un aumento de tensiones y violencia en el campo, paralelamente con una campaña mediática descalificadora, en junio de 2012 las esperanzas son confrontadas con la realidad de la subversión institucional y precarización democrática, que resultaron en la deposición de Lugo con el juicio político.

En ese contexto, el problema que guía esa investigación consiste en comprender por qué las respuestas de Lugo a las demandas que pautaron la crisis de 2012 le sacaron del Ejecutivo nacional pero mantuvieron su espacio de liderazgo político. Las cuestiones centrales que se abordarán se refieren al rol del liderazgo político representado por Fernando Lugo y la centralidad de su figura en la política paraguaya desde 2008, para entender las dinámicas recientes del régimen democrático paraguayo a partir de la actuación de ese liderazgo.

Los objetivos específicos listados buscan, en primer lugar, establecer las principales demandas de las élites que se popularizaron en la crisis de 2012. Posteriormente se busca establecer cómo Lugo comprendió y cómo respondió a las demandas de la crisis de 2012. Además, otro punto a ser analizado es cómo las respues-

tas de Lugo le mantuvieron en el escenario político como principal liderazgo de centro-izquierda e izquierda paraguaya después de la crisis de 2012. Y por fin, será analizado cómo las respuestas del modelo político y las élites respondieron a la crisis, y cómo por consecuencia eso mantuvo el espacio contestatario que Fernando Lugo y el Frente Guasu (FG) pasaron a ocupar.

Para lograr esos objetivos el estudio utiliza las herramientas del análisis de discurso de una entrevista focalizada y en profundidad, semi-estructurada con guion más cerrado, que fue realizada con el expresidente Fernando Lugo. Eso va a permitir realizar los objetivos relacionados con la actuación de Lugo en la crisis de 2012 y su comprensión del escenario. También se utiliza el análisis de discurso para algunos editoriales del periódico con más circulación nacional, ABC Color, para ayudar a comprender las principales demandas surgidas en el escenario de la crisis de 2012. Otra herramienta metodológica usada es la estadística descriptiva, para obtener los datos sobre las relaciones de posesión de la tierra y sobre comportamiento político de la población paraguaya.

Después de esa introducción el artículo presenta los nuevos padrones de debilidad vistos en los regímenes democráticos contemporáneos, especialmente los latinoamericanos. En la secuencia es debatido el proceso de creación de demandas en la opinión pública para lograr legitimar los

momentos de subversión institucional, examinándose entonces el escenario creado en la crisis paraguaya de 2012. La sección siguiente enfoca en las respuestas del liderazgo a las demandas de la oposición, presentándose la comprensión que Lugo tuvo de las demandas y cómo ha buscado responderlas. Posteriormente son analizados los efectos de esas respuestas para el rol de liderazgo de Fernando Lugo en la política paraguaya, asimismo los efectos para el régimen democrático paraguayo. Por fin son presentadas algunas consideraciones finales sobre los efectos de la crisis de 2012 observados a lo largo del estudio.

CRISIS POLÍTICAS Y PRECARIZACIÓN DEMOCRÁTICA: NUEVOS PADRONES DE DEBILIDAD DE LOS REGÍMENES DEMOCRÁTICOS

Aunque los retrocesos autoritarios no se consolidaron en las transiciones democráticas latinoamericanas, la realidad ha puesto otros desafíos para mantener regímenes democráticos con más calidad y efectividad. Desde el punto de vista de las respuestas gubernamentales a las demandas ciudadanas, permanecieron las dificultades para generar políticas públicas de eficiencia económica y de bienestar social, mientras que desde el punto de vista de la dinámica del sistema político

se observan las constantes crisis políticas, cuyas soluciones debilitan las instituciones y la confianza ciudadana en el régimen.

Al considerar el análisis más amplio del régimen político es reconocido que existen múltiples interpretaciones y aplicaciones para el concepto de democracia, sin embargo para lograr cumplir los objetivos propuestos en ésta investigación fue necesario limitarse a un campo interpretativo. Es reconocida la importancia de los estudios centrados en aspectos formal-normativos de los regímenes democráticos, su funcionamiento interno y sus procedimientos. No obstante, el artículo centrará su abordaje en las relaciones de ésa institucionalidad con el comportamiento político ciudadano y sus principales grupos políticos y liderazgos.

Para examinar la relación entre demandas ciudadanas y respuestas gubernamentales, para lograr crear y mantener un comportamiento positivo hacia el régimen político, Putnam (1996) establece un modelo analítico de la gobernanza con la evaluación del desempeño gubernamental. El punto inicial del modelo de Putnam (1996) son las exigencias sostenidas por la población. Las demandas se van socializando con las interacciones políticas (como las asociaciones de intereses, las organizaciones representativas de clase) y generando grupos de interés que se convierten en grupos de presión. Según Castillo Esparcia (2011) los

grupos de interés son el lugar donde los individuos se acercan con otros que poseen demandas e intereses convergentes, siendo también un importante elemento de socialización y de construcción de identidades y posicionamientos políticos. A partir de las demandas construidas al interior de los grupos de intereses, esas demandas son filtradas por los grupos de presión que las presentan al gobierno, actuando para que el gobierno solucione las demandas sostenidas.

Sin embargo, no todas las demandas llegan del mismo modo o poseen la misma posibilidad de ser respondidas por el gobierno. De acuerdo con Schumpeter (1961), eso ocurre pues existen desigualdades de capacidades entre los individuos y grupos de interés y presión. Las dos principales desigualdades observadas son las de recursos económicos y de activismo político. Eso nos permite considerar que los grupos con más recursos económicos tienen más posibilidad de ver sus demandas recibidas por el gobierno, puesto que muchas veces ayudan a financiar las campañas, asimismo tienen más facilidad de movilizar recursos para hacer una campaña pública en pos de sus intereses para convertirlos en demandas con aceptación en la opinión pública (CASTILLO ESPARCIA, 2011). Además de la movilización de recursos, también es importante la capacidad de movilizar los individuos para presionar sus representantes a resolver las demandas

sostenidas, donde vemos que algunos grupos tienen más capacidad de movilizar sus miembros y mantenerlos activamente presionando el gobierno para solucionar sus demandas.

De tal modo, la tercera parte del modelo analítico es la llegada de las demandas al gobierno y poseerá más relevancia cuanto mayor sea la capacidad de presión del grupo que posee la demanda. Cuando el gobierno acepta la demanda se pasa a trabajar en una opción de política a ser adoptada, estableciendo el modo como la demanda va o no va a ser solucionada por el gobierno. Con la estrategia que el gobierno adopta para generar una política que responde la demanda, se alcanza la última etapa del modelo que es la implementación (PUTNAM, 1996).

La evaluación del desempeño gubernamental busca dimensionar la capacidad de responder las demandas sociales. Ese juzgamiento comprende que hay una multiplicidad de necesidades sociales, una pluralidad de intereses presionando las instituciones estatales. En ese escenario Putnam (1996) considera que la estructura gubernamental debe acercarse de la población para ser más representativa de sus intereses más inmediatos.

Es un cuadro analítico vinculado al modelo circular del sistema político de Easton (1965), señalando la relación entre las demandas (*inputs*) externas e internas al sistema político, sus res-

puestas (*outputs*) y la evaluación que los grupos políticos y sociales hacen de esas respuestas (*feedbacks*), como elementos que van (o no) a fornecer el soporte necesario para el sistema político mantenerse estable. Vale recordar que en el modelo de Easton (1965) existen demandas que surgen en el propio sistema político, en la relación entre los grupos políticos gobernantes y opositores, y surgen en el ambiente económico-social (afuera del sistema).

Por lo tanto, el contexto teórico-conceptual establecido por Easton (1965) y Putnam (1996) intenta responder los dilemas de la acción colectiva al buscar entender cómo solucionar problemas colectivos. La respuesta positiva viene de un capital social positivo, evaluando el modo como las tradiciones cívicas son utilizadas para desarrollar la sociedad. Cuanto mayor es el capital más la población confía en sus instituciones. Cuando la población confía en las instituciones ella pasa a colaborar con el desarrollo institucional, y eso posibilitará establecer las normas sociales, al proveer estabilidad y previsibilidad para las relaciones políticas.

A partir de la sospecha institucional se construye un proceso permanente de debilitamiento organizacional, consistiendo en una construcción coyuntural de la estructura institucional a lo largo del tiempo, permitiendo la subversión momentánea para solucionar demandas inmediatas.

Pero eso solo puede ser realizado pues hay un espacio para la precarización en la cultura y actitudes políticas individuales. El proceso se inicia con la construcción institucional históricamente debilitada, influyendo en la baja inversión institucional durante la democratización, resultando en baja capacidad de respuesta del Estado a las demandas ciudadanas, que pasa a sostener un comportamiento negativo con espacio para subvertir las instituciones (BOURSCHEID, 2019).

El uso de la precarización institucional (CAMACHO, 2012; PIETSCH, MILLER y KARP, 2015) está limitada por la legitimidad institucional entre los grupos que luchan por el poder, y el costo de su uso debe ser menor que los costos de las alternativas. Si el dominio basado en la legalidad institucional no mantiene la racionalidad del uso de las instituciones, permaneciendo la evaluación de los grupos de interés que las instituciones son el elemento estabilizador, es permitido el surgimiento de otras formas de sostener el dominio político. Sería la precarización del dominio legal, pues la legalidad de las normas establecidas para regir las relaciones políticas ya no iba a ser confiable para los distintos grupos políticos.

El punto de la precarización del funcionamiento institucional – en el estudio específico de Paraguay – conlleva algunas reflexiones sobre los límites de avances sociales para la población y el ejercicio de los principios democráticos de ma-

nera más plena. La dependencia de los países sudamericanos en relación al mercado para resolver sus problemas políticos, sociales y económicos se convierte en una violación a los principios ciudadanos y de vivencia democrática (BAQUERO, 2008; TURNER, 1994).

Las principales motivaciones para el proceso de precarización institucional, que produce la precarización democrática, son problemas de institucionalidad política e institucionalidad del Estado. La primera causa se refiere al hecho que el establecimiento de instituciones administradoras del proceso político de lucha por el poder ofrece margen para subvertirlas (manteniéndolas, pues son ellas que legitiman la dominación política), en términos similares a los establecidos en Bourscheid (2019) cuando se analiza el caso del régimen paraguayo. Hay un proceso de manipulación institucional para lograr responder las exigencias inmediatas de las élites político-económicas que no son respondidas por las instituciones del régimen, o hasta mismo la manipulación institucional para solucionar demandas de las masas, lo que Putnam (1996) analiza cuando existe un capital social negativo, dificultando la aceptación y permanencia del orden establecido.

La segunda motivación es la falta de incentivo de la institucionalidad política para crear eficiencia estatal y generar políticas públicas de bienestar social y eficiencia económica. Esos ele-

mentos fomentan un comportamiento político negativo en relación al régimen y permiten subvertir las instituciones por las élites o masas, para solucionar sus demandas con la acción individualizada económico-corporativa (BOURSCHEID y GONZÁLEZ, 2019).

Baquero (2008), Celi (2007) y Mussi y Afonso (2008) resaltan que un Estado moderno se desarrolla como una parte del mercado, en un proceso de transnacionalización económica, corriendo el riesgo de debilitar su soberanía y generando incertidumbres ciudadanas. El debilitamiento del trabajo es una consecuencia inevitable, generando más inestabilidad y desconfianza en el Estado (BAQUERO, 2008; CELI, 2007; MUSSI y AFONSO, 2008).

Otro análisis sobre la relación de la estructura gubernamental con los intereses económicos es presentado por Mendonça (2007) cuando establece el modelo de un círculo vicioso de la inestabilidad política. La propuesta teórica del autor se inserta en el debate acerca de la influencia de la pobreza y la desigualdad en el crecimiento económico, y cómo las limitaciones para transformar los resultados económicos en cambios sociales fomentan la inestabilidad y los conflictos político-sociales. El uso del modelo analítico de Mendonça (2007) se refiere, pues, a apreciar los intereses económicos como una base que fomenta las demandas de la población (tanto de las masas

cuanto de las élites) que van convertirse en grupos de interés que presionarán el Estado por respuestas gubernamentales, como en el modelo de Putnam (1996). Las respuestas de la estructura gubernamental para las demandas ciudadanas buscan mantener la legitimidad del orden, con la evaluación y valoración de los *outputs* del sistema político por los ciudadanos, es decir, los *feedbacks* (EASTON, 1965).

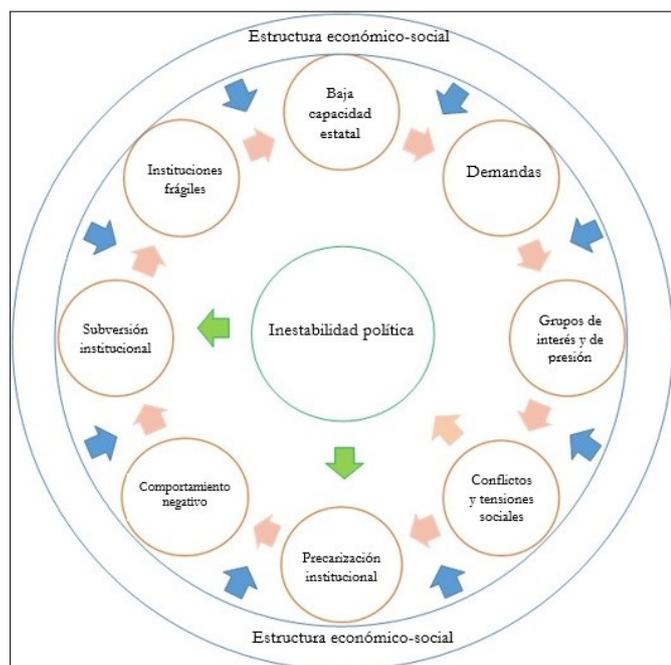
La solución paraguaya para la inestabilidad política es garantizar los derechos de propiedad, reprimiendo o mitigando los derechos sociales y políticos de los grupos que demandan y presionan el gobierno por soluciones a los problemas de la pobreza (MENDONÇA, 2007). Eso ocurriría debido a las desigualdades de capacidades para presionar el sistema político (SCHUMPETER, 1961), resultando en diferencias entre las élites y masas en la posibilidad de convertir las demandas específicas en demandas de la opinión pública, posicionando los derechos de propiedad como la demanda más aceptada en la opinión pública.

En el modelo del círculo vicioso de precarización democrática los *inputs* ciudadanos para el sistema político surgen en la estructura económico-social, y serán esos intereses y valores que presionarán el sistema político para adaptarse a las correlaciones de fuerzas.

De tal modo, el modelo establecido para analizar el caso del régimen democrático pa-

raguayo es el círculo vicioso de la precarización democrática, una unión de características de los modelos presentados hasta aquí en esa sección.

Figura 1 - El modelo del círculo vicioso de la precarización democrática



Fuente: Bourscheid y Marques (2022, p. 121)

Paralelamente a la estructura económico-social, el sistema político comienza a desarrollar su dinámica propia, construyendo la institucionalidad del modelo de dominación, que en el caso de precarización democrática consiste en instituciones frágiles. Otro elemento de dinámica del modelo es la inestabilidad política, que interacciona con las etapas de la precarización democrática para fomentar el escenario de debilidad institucional y comportamiento no democrático.

CREACIÓN DE DEMANDAS EN LA OPINIÓN PÚBLICA PARA LEGITIMAR LA SUBVERSIÓN INSTITUCIONAL

Al aplicar el modelo teórico-conceptual del círculo vicioso de la precarización democrática para estudiar el caso paraguayo de la crisis de 2012, primeramente es necesario establecer las principales demandas que sostuvieron en la opinión pública la retórica que deponer Fernando Lugo de la presidencia solucionaría la crisis. A lo largo de esa sección serán presentados los dos principales grupos de demandas: 1- seguridad pública y manutención del orden, con la contención de las movilizaciones sociales, la represión de grupos armados y la respuesta a los casos de Ñacunday, Curuguaty y del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); y 2- defensa de la soberanía nacional, al señalar el riesgo del acercamiento ideológico con los gobiernos progresistas y de izquierda en la región, asimismo la consideración de que se estaba entregando la soberanía nacional con la firma de la cláusula democrática del MERCOSUR.

Aunque el gobierno demostraba desde su inicio que no lograría romper con el Estado oligárquico, al actuar como un agente perpetuador de la dominación terrateniente sobre los campesinos, asimismo al mantener las bases del modelo económico primario-exportador, la retórica del

cambio social y la posibilidad de utilizar una parte de los recursos extraídos por el modelo para reducir las asimetrías sociales (a través del Estado) seguía siendo el centro del proyecto de gobierno de Lugo. La gran diferencia del escenario fue el cambio de postura de los campesinos, que comenzaron a romper con su inercia y pasaron a presionar el gobierno por alguna solución para sus demandas (BOURSCHEID, 2019).

Los campesinos pasaron a presionar el sistema político por acciones que pudieran responder sus intereses, para entonces mantener su soporte al sistema (como en el círculo vicioso de la precarización democrática). La creencia en la posibilidad del gobierno responder esas demandas, después de la salida del PLRA de la APC (en 2009), con una reorientación de la política agraria, paulatinamente se convirtió en una agitación campesina y en amenazas conflictivas que el gobierno no pudo controlar (BOURSCHEID, 2015; BOZZOLASCO, 2013).

La alteración del cuadro fue influenciada por dos factores de presión sobre el gobierno: los factores estructurales, vinculados al modelo político-económico paraguayo y las demandas de los grupos vinculados a la coalición conservadora¹ en relación al gobierno; y los factores coyunturales, relacionados con los eventos del primer semestre de 2012 y que el gobierno no consiguió controlar y responder míni-

mamente las demandas de los grupos en conflicto, no logrando sostener la retórica consensual para estabilizar las tensiones sociales.

La dificultad para Lugo se ubicaba en el sofisma de su proyecto para las relaciones de producción agrarias: la retórica era de cambio y prioridad a los campesinos, pero la actuación se vinculaba a la necesidad de apoyo de la oligarquía terrateniente (o por lo menos no confrontar con ella). Lugo estaba condicionado por la legitimidad gubernamental ante la oligarquía terrateniente, debido a la concentración de recursos en posesión de los terratenientes². Para romper con el círculo vicioso de la inestabilidad política (MENDONÇA, 2007) era necesario mantener la inversión de las oligarquías que sería fomentada por la confianza en el gobierno. Por otro lado, también era necesario mantener la legitimidad ante los campesinos con la permanencia de la confianza en las posibilidades de cambios estructurales sociales y económicos, por lo menos respondiendo retóricamente sus demandas y con eso manteniendo el liderazgo gubernamental. La oligarquía terrateniente, por su parte, demandaba que el gobierno mantuviera el liderazgo sobre los campesinos de modo que eso contuviera su movilización y obstaculizara la posibilidad de estallar un conflicto agrario, además de mantener la seguridad jurídica para su actividad económica.

Lugo no consideró de modo suficientemente adecuado el potencial de los movimientos campesinos como contestatarios del orden hegemónico oligárquico, con su espontaneidad y fuerza de movilización: desde el inicio de la transición democrática los movimientos campesinos fueron el sector más dinámico de la sociedad civil (BOURSCHEID, 2019). Ese fenómeno se ha dado por el aislamiento del gobierno en relación a los movimientos de la sociedad civil, al adentrar en el institucionalismo burocrático, en el conformismo sobre las posibilidades de escisión con la coalición conservadora predominante, transformando una experiencia con potencial de cambios en el carácter del Estado (la alianza APC) en un grupo de representantes de propuestas alternativas subordinadas a un liderazgo caudillo.

Es posible posicionar el inmovilismo de Lugo ante la creciente movilización campesina, al profundizar las tensiones agrarias, como la necesidad de integrar las demandas de la sociedad civil en un Estado ampliado, intentando mantener una evaluación positiva de las clases subordinadas sobre el gobierno (como en el modelo de PUTNAM, 1996), para mantener el soporte de la población al sistema político (como en el modelo EASTON, 1965). Eso es importante para la permanencia de la estabilidad en las relaciones políticas que favorezca la coalición conservadora en su extracción de recursos (como decía MENDONÇA, 2007).

Se crea entonces una falsa sensación de estabilidad pues una parte considerable de los liderazgos de los movimientos campesinos siguió apoyando Lugo, entre 2008 y 2011, mientras amplios sectores de la oligarquía terrateniente todavía no señalaban claramente hacia la ruptura con Lugo, puesto que todavía no habían sufrido ningún golpe duro contra sus intereses (BOZZOLASCO, 2013).

La permanencia del inmovilismo gubernamental ante la alteración del cuadro consensual tan solo profundizó la crisis del consenso personalista. El inmovilismo representaría la falta de capacidad para el liderazgo político del caudillo personalista, además de ser un método de acción política que apenas profundizaría la crisis de representación del sistema, pues no puede responder las demandas, tanto de la oligarquía terrateniente cuanto de los campesinos.

Con eso, en el caso paraguayo la crisis de liderazgo del modelo de dominación se refiere a la incapacidad de las fuerzas políticas predominantes para controlar las movilizaciones de las masas populares, estabilizando el círculo vicioso de inestabilidad política (MENDONÇA, 2007) que fomenta el círculo vicioso de la precarización democrática (BOURSCHEID y MARQUES, 2022). En ese sentido, la frágil hegemonía sostenida en el periodo democrático fue desestabilizada con la ascensión del movimiento campesino, que con sus movi-

lizaciones recurrentes y crecientes para solucionar sus demandas más urgentes (como el inicio de un proyecto de reforma agraria y el acceso al financiamiento y créditos para la producción), junto con la incapacidad de los gobiernos para responder esas demandas.

No se esperaba que movimientos aislados impulsados por liderazgos desvinculados del gobierno Lugo y las principales organizaciones campesinas pudieran reunir los campesinos hartos de esperar, sin señales visibles de alteración del cuadro socioeconómico, y que eso desestabilizara el gobierno de modo irreversible (BOURSCHEID, 2019). Y fueron esos movimientos, junto con la estructura política inmóvil de Lugo, con el inmovilismo ante el creciente conflicto en el campo, que culminaron en la masacre de Curuguaty y la posterior deposición de Lugo. En la secuencia son analizados los fenómenos relacionados al conflicto agrario del primer semestre de 2012, listados como factores coyunturales para derrocar Lugo, y legitimaron en la opinión pública las demandas para solucionar la crisis.

Toda la estabilidad superficial del gobierno Lugo se vio amenazada en el inicio de 2012, cuando un hecho inicialmente aislado y sin grandes proyecciones ganó notoriedad y aglomeró miles de campesinos, “evidenciando todas las debilidades de la legitimidad de los gobiernos paraguayos ante la masa campesina expulsada de sus tie-

rras y los problemas históricos de extranjerización del campo paraguayo, teniendo en el inmovilismo de Lugo un factor fomentador de innumerables críticas personales y al gobierno” (BOURSCHEID, 2015, p. 67). El tema central era la dificultad del gobierno para señalar cualquier respuesta a la presión campesina, mientras esperaba que se calmaran los ánimos con el inmovilismo para que la postura de los campesinos se volviera menos afirmativa y se posibilitara una negociación con la oligarquía terrateniente.

Un grupo de campesinos llamados carperos (acampaban en carpas de lona), liderados por Victoriano López, se agruparon en la región de Ñacunday (Departamento de Alto Paraná, frontera con Brasil y Argentina) en enero de 2012 con la pretensión de ocupar y reivindicar tierras adquiridas de modo irregular durante la dictadura stronista, exigiendo la desapropiación para reforma agraria. Los propietarios brasileños establecidos en la región no retrocedieron ante las demandas de los carperos, al llamar la protección estatal de la propiedad privada de aquellas tierras, reclamando ser los propietarios y que estaban efectivamente produciendo y colaborando con el crecimiento económico nacional (ULTIMA HORA, 2012b).

Ese escenario se inserta en el modelo del círculo vicioso de la inestabilidad política de Mendonça (2007), pues el problema agrario genera tensiones y conflictos sociales, al crear el calle-

jón sin salida entre las demandas campesinas y de los propietarios extranjeros, puesto que los propietarios extranjeros demandan la protección estatal sobre la propiedad, utilizándose del argumento que su actividad económica posibilita la dinamización de toda la economía nacional. Para mantener su inversión, asimismo la confianza externa para invertir en Paraguay, sería necesario que el gobierno demostrara estabilidad jurídica y protección gubernamental del capital invertido en el país, seguridad jurídica para extraer recursos (BOURSCHEID, 2019).

Ese callejón sin salida ya fue presentado y analizado en el estudio acerca del proceso de extranjerización del territorio paraguayo de Glauzer (2009), al caracterizar el fenómeno como una “guerra por espacio” y con su principal representación en el conflicto agrario entre los colonos extranjeros (fundamentalmente los brasileños) y los campesinos paraguayos.

Gradualmente fueron sumándose adeptos a la movilización provenientes de las más variadas regiones del país, viendo en el movimiento campesino de Ñacunday la posibilidad de visibilizar ante el gobierno nacional y la prensa (nacional y extranjera) la incapacidad del régimen democrático paraguayo para solucionar el problema de la concentración de tierras (BOURSCHEID, 2015). Era ese el perfil de las nuevas movilización campesinas, según Mora (2006), al observar que “las accio-

nes de tipo colectivas, que en un primer momento eran aisladas entre sí, en los últimos tiempos se generalizaron y se coordinaron, abarcando todo el país, envolviendo la mayoría de las organizaciones campesinas y sociales” (MORA, 2006: 348). Contrariamente al análisis del autor, es posible afirmar que aunque la movilización de los carperos de Ñacunday logró apoyo y participación de campesinos de varias regiones del país, era todavía una movilización puntual preocupada fundamentalmente con las tierras reclamadas en cuestión y no una política de reforma agraria más general. El modelo de movilización puntual por demandas específicas seguía predominante (BOURSCHEID, 2019).

Ante los impases en las negociaciones con Victoriano López impidiendo los acuerdos, junto con la intensificación de las tensiones que evidenció la posibilidad inminente de un conflicto abierto entre los colonos brasileños y los carperos, el gobierno y sus fuerzas de seguridad seguían apenas observando la situación, actuando tan solo cuando la amenaza de enfrentamiento aumentaba (ULTIMA HORA, 2012a). La actuación de Lugo seguía en búsqueda de agotar los dos lados hasta crear un equilibrio de fuerzas que permitiera su participación como árbitro y generador del consenso. Sin embargo, cuanto más el gobierno permanecía inmóvil esperando que los dos lados procuraran su mediación, los lados apenas aumentaban su demanda por una solución inmediata que les fuera favorable.

Después de una amplia cobertura mediática nacional y extranjera (básicamente de medios brasileños³), semanas de negociaciones, innumerables amenazas armadas entre los actores en pugna (ULTIMA HORA, 2012d; ULTIMA HORA, 2012f), se puede presentar el saldo de la crisis de Ñacunday de la siguiente forma: Victoriano López fue detenido y encarcelado por invasión de propiedad privada (ULTIMA HORA, 2012e); los carperos fueron reubicados en otra localidad cercana al local de las tensiones (ULTIMA HORA, 2012c); los propietarios brasileños recibieron apoyo de una parte importante de la prensa nacional e internacional (con los principales medios brasileños), asimismo el apoyo de políticos brasileños que ayudaron en las negociaciones (ULTIMA HORA, 2012b).

En lo que se refiere al gobierno paraguayo, él salió debilitado y la figura del presidente Lugo y de sus ministros más cercanos (Miguel López Perito – Gabinete Civil – y Carlos Filizzola – Interior) se desgastó, lo que representó un punto de inflexión del gobierno de alianzas y consenso de Lugo (ULTIMA HORA, 2012e). La confianza en las reformas prometidas por Lugo ya había se desteñido. Ni siquiera la base aliada oligárquica que ayudó la llegada al poder estaba dispuesta a mantenerlo después de la incapacidad gubernamental en asegurar la seguridad jurídica para su extracción de riquezas.

El escenario conflictivo en Ñacunday había roto la lógica de legitimación del dominio político oligárquico, un factor esencial para la permanencia de un gobierno que ascendió al poder apoyado por el modelo de dominación oligárquico (BOURSCHEID, 2015). En ese sentido, Lugo perdió al mismo tiempo el apoyo de la oligarquía terrateniente y de los campesinos, con la primera perdiendo su confianza en la capacidad de manutención de la seguridad jurídica por parte del gobierno, y los segundos no confiando más en la capacidad del gobierno para lograr responder mínimamente sus demandas por reforma agraria y cambios en la gestión gubernamental sobre los temas agrarios.

No obstante esos sucesos, faltaba algún evento de conmoción nacional que evidenciara la incapacidad de Lugo gobernar ante los impases agrarios, asimismo legitimar y apoyar una deposición. Entre febrero y mayo de 2012 el gobierno Lugo disfrutó una vez más de una tranquilidad ilusoria, caracterizada por el intercambio de acusaciones entre gobierno y oposición sobre la culpa en el conflicto agrario, pérdida del apoyo de casi toda base aliada oligárquica (proceso iniciado en 2009, con la salida del PLRA), pero logrando mantenerse institucionalmente (BOZZOLASCO, 2013). El escenario se alteró de modo irreversible en 15 de junio cuando ocurrió la masacre de Curuguaty (Departamento de Canindeyú, frontera con

Brasil), un evento de conmoción nacional que desafió la política de consenso de Lugo.

En una acción de desalojo de los campesinos acampados en la estancia Campos Morombí ocurrió el enfrentamiento entre policías y campesinos que victimó seis policías y once campesinos (ABC COLOR, 2013; ULTIMA HORA, 2012g). Esa fatalidad se insertaba en el contexto de la violencia armada que caracterizaba los conflictos por la posesión de la tierra en Paraguay, desde la democratización, donde la represión de los órganos de seguridad es un lugar común para la resolución de las situaciones de callejones sin salida.

Para los campesinos la ocupación de grandes estancias, aunque no aparecía en el repertorio de opciones de ejercicio democrático, era la alternativa disponible para lograr una efectiva participación y presión para la toma de decisiones que los afectan, todavía considerando que su movilización pueda generar reacciones contrarias (BOURSCHEID, 2019). Según Fogel (2006, p. 98), “la respuesta a las ocupaciones fue una mayor violencia (destrucción de cultivos, incendios de chozas, apresamientos masivos) ampliamente justificada por los medios de prensa – que expresaron el poder simbólico de los grandes propietarios – como ataque a la delincuencia”. Es una situación de posicionamiento de los grupos ante la sociedad, utilizándose de la divulgación en la prensa para poder legitimar sus presiones sobre el gobierno.

El operativo policial en Curuguaty fue muy criticado por su planeamiento, asimismo su ejecución, al mostrar una evidente insatisfacción de varios sectores sociales. El poder ejecutivo fue directamente responsabilizado y duramente criticado, pues la acción policial estaba bajo el mando del ejecutivo (ministerio del interior) y sus acciones después del ocurrido demostraron una vez más la inmovilidad ante el conflicto social, lo que fomentaba la crítica feroz que legitimaría la posterior deposición de Lugo (BOURSCHEID, 2015).

Algunos sectores campesinos – básicamente reunidos en el movimiento carpero – se cansaron de esperar por una solución institucional por parte del gobierno y pasaron a actuar, aunque de modo desorganizado (como en Ñacunday) y desesperada (como en Curuguaty), visualizándose una falta de capacidad de ejercicio del poder por parte de Lugo, al no observarse que pudiera administrar los conflictos sociales y permanecer su propuesta de cambio del carácter gubernamental para un proyecto de justicia social.

Por otro lado, los sectores de la oligarquía que habían se aliado con Lugo en las elecciones de 2008 (con la APC) rompieron con el gobierno, pues el mandatario no había ofertado las garantías necesarias para mantener sus actividades económicas de modo seguro, observándose esa incapacidad en las malogradas operaciones policiales en los dos eventos aquí analizados

(Ñacunday y Curuguaty). La permanencia del modelo de dominación oligárquico estaba amenazada por la ruptura del orden democrático que legitimaba mantener la subordinación de los campesinos. Lugo ya no cumplía con el papel de mediador del conflicto entre terratenientes y campesinos, ya no lograba demostrar para ninguna de las fuerzas en pugna que era posible darle una victoria en la contienda, aunque con limitaciones (como se esperaba de la actuación del gran arbitro gramsciano).

De tal modo, el día 20 de junio de 2012 fue presentada la propuesta de juicio político del presidente Fernando Lugo. La propuesta fue impulsada por la ANR y fue apoyada por partidos que antes pertenecían a la alianza gubernista, destacándose el caso del PLRA que era la principal base parlamentaria que sostenía el gobierno (BOZZOLASCO, 2013). Aunque el PLRA no participaba de la APC desde 2009, todavía mantenía algunos ministerios y ayudaba a obstaculizar los intentos previos de juicio político.

En síntesis, en la propuesta de juicio político el presidente era acusado de: (I) no castigar los campesinos invasores de las propiedades en Ñacunday; (II) no lograr garantizar la seguridad de la ciudadanía y no demostrar ganas de combatir decisivamente el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo guerrillero que actúa en el norte de Paraguay, con un número creciente de ataques durante el gobierno Lugo; (III) haber autorizado,

en 2011, una protesta realizada por movimientos sociales delante del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas; (IV) haber actuado con negligencia en los sucesos de Curuguaty, asimismo en otros conflictos por la posesión de la tierra; y (V) haber firmado el Protocolo de Ushuaya-2, de compromiso democrático del MERCOSUR, que fue considerado por la oposición como un hecho de entrega de la soberanía nacional a los países más grandes del bloque – Argentina y Brasil (BOURSCHEID, 2015; BOZZOLASCO, 2013).

Los componentes del juicio político están relacionados con demandas de la coalición conservadora que el gobierno no lograba responder, demandas relacionadas al círculo vicioso de la inestabilidad política (MENDONÇA, 2007). El gobierno ya no lograba asegurar la seguridad jurídica y garantizar la propiedad privada ante la acción contestataria de algunos grupos campesinos. La presión de los terratenientes por la represión gubernamental y control de los campesinos es parte de sus demandas desde el inicio de la democratización, lo que conlleva la presión contraria de los campesinos por alguna respuesta del gobierno sobre su situación agraria, utilizándose de una presión coercitiva caso sus demandas no fueran acogidas por el gobierno. La inmovilidad del gobierno Lugo ante las presiones de los campesinos fomentó las movilizaciones que, por su parte, resultaron en la demanda oligárquica por contención de las

movilizaciones. El círculo vicioso de la inestabilidad política y el de la precarización democrática acababan siendo alimentados y el inmovilismo del gobierno ante las presiones genera una nueva demanda: la sustitución del gobierno.

En 22 de junio, después de un rápido proceso, la Cámara de Diputados y el Senado de la República votaron favorablemente por la destitución de Fernando Lugo del cargo de presidente de la república. En menos de dos días el proceso había sido encaminado y acogido por la Cámara de Diputados, que por su turno encaminó al Senado, constituido como el tribunal para el juicio político. En el Senado la deposición fue aprobada por 39 votos contra 4, con 2 abstenciones, logrando la mayoría absoluta de dos tercios exigida por la Constitución y resultando en la deposición de Fernando Lugo por el mal desempeño de su función de presidente de la república (ABC COLOR, 2012a; GAIO, 2012).

La repercusión y las respuestas al evento en Paraguay fueron inmediatas. *“O povo paraguaio [...] manifestou sua aversão ao juízo político de Lugo, e diversas manifestações contra seu afastamento foram observadas em diferentes regiões do país durante o processo de julgamento”* (GAIO, 2012, p. 4). Cuando fue lograda la deposición los manifestantes que esperaban el resultado en las plazas ante la sede del Congreso paraguayo y clamaban por la ilegitimidad de las acciones conduci-

das por el legislativo entraron en conflicto con la policía, demostrando la inestabilidad política producida por la remoción de Lugo (GAIO, 2012).

Sin embargo, esas manifestaciones no impidieron consumir el rito de deposición. El apoyo popular no era en grado suficiente para sostener a Lugo en el poder, como podría haber ocurrido caso su base electoral tuviera una concientización en relación a la necesidad de mantener el proyecto de gobierno alternativo que Lugo afirmaba representar. Lo que se observó fue la participación de algunos sectores de los movimientos sociales, principalmente los jóvenes, aunque no alcanzando las grandes masas que podrían darle soporte político. Sin base de sostenimiento parlamentario y sin apoyo masivo en la sociedad civil, el gobierno resultó aislado ante la situación de deposición. No obstante, Lugo considera que había base de soporte jurídico y militar para el gobierno, al optar por pacificar la situación sometiéndose al proceso (BOURSCHEID, 2019). La concepción de Lugo acerca de los eventos será hecha en detalle con el análisis de discurso de la entrevista hecha con él, en la sección siguiente.

Uno de los motivos para la deposición que fue muy utilizada para la legitimación retórica fue el supuesto vínculo de Lugo con las movilizaciones campesinas y con el grupo guerrillero del EPP. La coalición conservadora, aprovechándose de la alianza con los medios empresariales, em-

prendió una campaña para deslegitimar Lugo, al buscar caracterizarlo como instigador de los campesinos movilizados en Ñacunday y Curuguaty.

Un ejemplo de esa campaña deslegitimadora fue una secuencia de cuatro artículos de opinión del columnista Gonzalo Quintana del diario ABC Color titulada “Ñacunday o el resumen de la subversión”. Desde el primer artículo el columnista afirmaba que Lugo era el gran mentor de la movilización campesina, al afirmar que la principal organización que lideraba el movimiento carpero (la Liga Nacional de Carperos – LNC) había sido creada por el mismo Lugo: “La LNC es una entidad liderada por José Rodríguez, organizada bajo la dirección de Lugo para cumplir distintas misiones políticas y con el objetivo inmediato, según un comunicado oficial, de anular todos los títulos de propiedad” (ABC COLOR, 2012b).

Lo que se intenta es instalar la percepción de que Lugo actuaba para perjudicar la seguridad jurídica del empresariado urbano y rural, su aspiración sería construir una estructura gubernamental que permitiera el patrimonialismo y clientelismo para perpetuarse en el poder, utilizándose del poder de movilización campesina para presionar los grupos de oposición (ABC COLOR, 2012b). La campaña mediática buscaba presentar el riesgo de convertir Paraguay al modelo de gobierno de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba, regresando el viejo “miedo del comunismo” (cuco del comunis-

mo) del periodo stronista. A partir de una retórica con visión maniquea, si Lugo no reprimía las movilizaciones campesinas (modo de actuar predominante en los gobiernos hasta entonces) obviamente estaba fomentando esas movilizaciones.

Por su parte, el EPP es la rama armada del Partido Patria Libre, articulándose en los años 1990 y 2000 con algunas acciones ofensivas, destacándose el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas (hija del expresidente Raúl Cubas Grau) entre septiembre de 2004 y febrero de 2005. Sin embargo, fue en marzo de 2008 que el EPP apareció al público y comenzó a actuar como una guerrilla marxista-leninista del norte paraguayo (especialmente en los Departamentos de San Pedro y Concepción). Es decir, el EPP comenzó a actuar justamente en el escenario de ascensión de Lugo al poder y su base de actuación es la base histórica de actuación de Lugo. El pasado común de luchas sociales de Lugo (como obispo) y de los miembros del EPP (antes actuando en el PPL) hizo que la coalición conservadora considerara que el supuesto inmovilismo del gobierno⁴ ante el aumento de los ataques del EPP era una connivencia y una articulación del gobierno con el grupo guerrillero (BOURSCHEID, 2013).

La vinculación de Lugo con el EPP y las movilizaciones campesinas es presentada en un editorial de ABC Color de 17 de junio de 2012 (dos días después de la masacre de Curuguaty), afir-

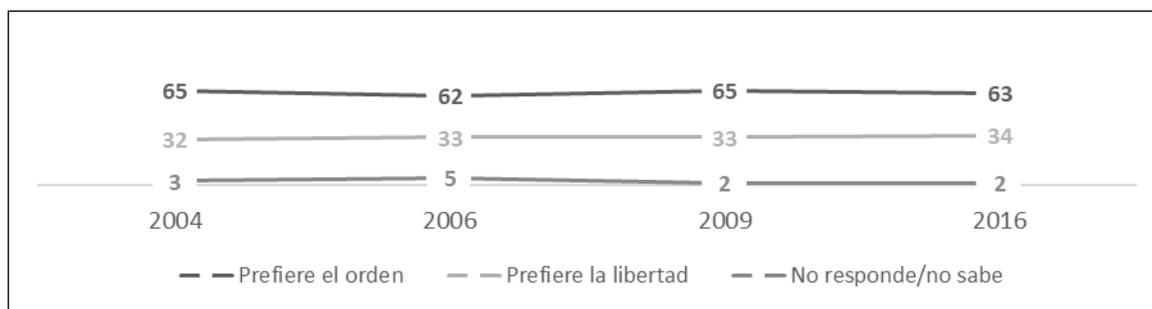
mando que Lugo era indiscutiblemente responsable por los eventos violentos, debido “a la absurda y públicamente conocida política de tolerancia – complicidad, sería la palabra correcta– del gobierno del presidente Fernando Lugo hacia el EPP y ciertas organizaciones campesinas violentas que, tras el disfraz de reivindicaciones sociales, han proliferado durante su administración, cometiendo delitos de acción penal pública con absoluta impunidad” (ABC COLOR, 2012c). O sea, gracias al gobierno Lugo esas movilizaciones violentas se establecieron y proliferaron, generando una situación de caos para el sector productivo nacional.

Una vez más es posible ver cómo esa construcción retórica está vinculada con el análisis de los círculos viciosos de la inestabilidad política (MENDONÇA, 2007) y de precarización democrática. Al culpar y responsabilizar Lugo por el conflicto social, la justificativa para la deposición se inserta en la necesidad de estabilización social, al crear seguridad jurídica y confianza en los inversores (nacionales y extranjeros) para regresar su actividad económica y así posibilitar la reactivación económica.

Esa retórica fue utilizada por los medios empresariales entre la masacre de Curguaty y la deposición de Lugo, sirviendo para legitimar el proceso, asimismo para deslegitimar y criticar la movilización favorable a la permanencia del gobierno Lugo.

Esa retórica mediática que reproduce los intereses de la coalición conservadora logra influenciar la percepción ciudadana sobre la necesidad de permanecer el orden, como elemento fundamental para la sociedad. Esa percepción es parte de la mismísima ideología autoritaria construida a lo largo del tiempo en Paraguay (ALCALCÁ, 2007), e interfiere en los círculos viciosos de inestabilidad política y de precarización democrática, al fomentar la idea de ser necesario mantener el orden por arriba de las libertades individuales. Tal percepción puede verse a partir de las encuestas del Latinobarómetro (2018), que preguntó 4 veces a los encuestados si preferían vivir en una sociedad ordenada aunque eso limitara algunas de sus libertades. Los resultados de Paraguay son presentados con el siguiente gráfico:

Gráfico 1 - Evolución de la percepción “orden x libertad” en Paraguay (2004-2016)



Fuente: Latinobarómetro (2018)

En las 4 encuestas la percepción que el orden es preferible en relación a la libertad fue más grande, con un promedio del 63,75% de las respuestas. Si comparado con el promedio regional de las 4 encuestas, con 52,78% de preferencia por el orden, Paraguay se posiciona como uno de los países latinoamericanos cuya población más prefiere el orden que algunas de sus libertades. Esa percepción (apenas ilustrada con los datos del Latinobarómetro, pues su serie histórica es corta y discontinua) se refiere a los elementos de cultura política y del círculo vicioso de la precarización democrática mencionados anteriormente. La retórica de la coalición conservadora apenas se aprovechó de la permanencia de esa percepción en la población para convencerla de la necesidad de deponer Lugo para regresar el orden que estaba siendo perdido debido a las movilizaciones campesinas y la supuesta connivencia gubernamental.

Después de analizar cómo fue creada la demanda de la deposición presidencial en la opinión pública, con las justificativas de la inseguridad y la entrega de la soberanía nacional, la sección siguiente va a enfocar las respuestas del liderazgo a las demandas de la oposición – convertidas en demandas de la opinión pública –, presentándose la comprensión que Lugo tuvo de las demandas y cómo ha buscado responderlas. Posteriormente son analizados los efectos de esas respuestas para el rol de liderazgo de Fernando Lugo en la política

paraguaya, asimismo los efectos para el régimen democrático paraguayo.

RESPUESTAS DEL LIDERAZGO POLÍTICO A LAS DEMANDAS Opositoras

Empezando el análisis por los desafíos enfrentados por el gobierno, Lugo (2016) considera que es posible ver tres grandes desafíos: una alianza poco trabajada; falta de cuadros; y la esperanza de cambios a partir de la institucionalidad. Primero, Lugo (2016) reconoce que la APC era tan solo una alianza electoral para derrotar la ANR, y que no era una alianza para gobernar – lo que necesitaría de negociaciones a cada tema o cada evento. Segundo, la dificultad de “no tener a mano – por no venir de un partido –, ni una estructura, ni una organización, eh, política, encontrar personas idóneas para el cargo en ese momento también” (LUGO, 2016, p. 9). Y tercero, Lugo (2016, p. 9) señala que “la misma ciudadanía que participó fervorosamente en las elecciones pensaba que con eso terminaba un proceso. Sin embargo, ahí comenzaba el proceso de cambio que queríamos iniciar”.

En ese sentido, para Lugo el escenario del 2008 era propicio para el cambio de liderazgo, debido al desgaste de la ANR. Pero ese era el único elemento de agregación y conver-

gencia entre los miembros de la APC, la búsqueda del éxito electoral. Sin embargo, cuando mira hacia el ejercicio del gobierno, Lugo (2016, p. 10) afirma que fue “un parto doloroso casi cotidiano el gobierno del 2008 al 2012. Uno tenía que estar en la vanguardia, decidiendo a veces sobre la marcha sin una capacidad, eh, de digerir muchos eventos y acontecimientos e información”. Lugo señala que ese problema de falta de convergencia no existía solo en la APC, sino que entre los mismísimos miembros del gobierno ejecutivo nacional, al afirmar que “después de una reunión de ministros uno sale y opina una cosa, el otro sale y opina otra cosa, que es legítimo, es legítimo por la diferencia, pero no fue saludable para consolidar un equipo de gobierno que diera una misma visión” (LUGO, 2016, p. 10).

Podemos ver aquí el posicionamiento de Lugo como el gran árbitro gramsciano, pues sería él que podría acomodar esos intereses y pensamientos diferentes y divergentes, pero con un “parto doloroso casi cotidiano”. Eso nos señala la dificultad del gobierno de Lugo para avanzar en las respuestas a las demandas que presionaban el gobierno, pues “la gente se empoderó de muchas instituciones” (LUGO, 2016, p. 10), y pasó a participar de la dinámica de demandas y respuestas del sistema político. No obstante esos avances listados por Lugo, hay que observar que las respuestas del

ejecutivo nacional estaban pendientes de las negociaciones con la coalición conservadora, puesto que seguía predominante en la sociedad.

Al analizar específicamente el ámbito institucional, con las relaciones entre los tres poderes constitucionales, Lugo reconoce su enorme dificultad para gobernar y el creciente desgaste de su gobierno. Aunque los tres poderes deberían actuar con “respeto, independencia y mutua cooperación”, Lugo (2016, p. 14) afirma que “existe una gran sensibilidad de interferencia, o de intromisión, de un poder a otro, que también es muy fuerte aquí”, es decir, que la cooperación se transforma en intromisión. Cuando habla del Poder Judicial, Lugo considera que siempre hubo mucha intromisión política en el proceso de selección de sus miembros, lo que le vuelve demasiado vinculado con los intereses que permitieron su conformación. Con relación al Poder Legislativo, Lugo reconoce que su constitución está basada en la pluralidad, buscando representar la diversidad de la población nacional, convirtiéndolo en un poder con múltiples intereses que pugnan por ser priorizados. “Y, como bambalina, el Poder Ejecutivo, haciendo muchas veces de equilibrista, eh, entre estos dos poderes, tratando de no interferir en los otros poderes, que nos exigió” (LUGO, 2016, p. 15).

Otra vez la retórica de Lugo es la del mediador y generador de consenso, con la figura del “equilibrista” entre esos varios intereses que, muchas veces, son divergentes y hasta irreconcilia-

bles. Cabe señalar la gran dificultad del gobierno Lugo actuar en esos parámetros, pues el Congreso era mayoritariamente conservador, asimismo el Poder Judicial. En ese sentido, cuando las demandas de los movimientos sociales presionaron el gobierno por políticas más progresistas, al mismo tiempo los otros dos poderes constitucionales presionaron el gobierno por mantener los intereses de la coalición conservadora.

Esa forma de actuación le sirvió hasta el 2011, “pero el 2012 apareció con toda su fuerza, ¿verdad?, problemas no resueltos, de que el Ejecutivo no tenga una representación significativa en el Parlamento” (LUGO, 2016, p. 15). Al reconocer la fragilidad de su poder en el Congreso, Lugo señala que “por eso se da ese proceso de juicio político, como figura jurídica, pero, [...] que eso sería un gran teatro jurídico, eh, para dar vía a la destitución. Fue un proceso más bien de destitución que [...] como juicio, fue muy pobre” (LUGO, 2016, p. 15). El reconocimiento de la fragilidad del gobierno ante el Parlamento es un primer paso para comprender la deposición, pero hasta ese momento Lugo no analizaba cómo esa demanda fue insertada en la opinión pública para legitimar el proceso.

Cuando analiza el proceso de juicio político, Lugo afirma que una de las motivaciones fue el “temor a la consolidación” del gobierno. “El gobierno gozaba de una gran popularidad, 49, 50% de popularidad, que no es poco, es significati-

vo” (LUGO, 2016, p. 15). Lugo (2016, p. 15) sigue su análisis de la motivación para el juicio diciendo que “los grandes políticos y actores de ese juicio político, ellos mismos reconocen, o sea, si le dejáramos a ese gobierno progresista, o así llamado progresista, de Lugo, esto, no solamente Lugo sino podría trascenderlo y darle continuidad, en detrimento de los partidos tradicionales”. Así que Lugo no considera las motivaciones del sentimiento de inseguridad y de entrega de la soberanía nacional que la coalición conservadora utilizó para justificar y legitimar el proceso.

Con relación a la aprobación gubernamental, Lugo está correcto en señalar que rondaba los 50%, pero se olvida de observar que esa evaluación venía en descenso a lo largo del gobierno, como es posible ver a partir de los datos del Latinobarómetro (Gráfico 2).

Ya fue señalado anteriormente que ese descenso en la evaluación del gobierno se relaciona con la dificultad de responder demandas. Lugo (2016, p. 3) reconoce tal dificultad, al afirmar que “el Estado moderno es un, en el discurso tenemos bien claro que tiene que ser un Estado ágil, un Estado dinámico, un Estado que dé respuestas rápidas, eh, la burocracia muchas veces nos atrasa en las respuestas”. Y eso ocurriría pues “el poder no está muchas veces en las instituciones, se ha cambiado”, y ha salido de los centros gubernamentales para “la calle, en las plazas, en las manifestaciones,

en las organizaciones, en las tomas de instituciones públicas” (LUGO, 2016, p. 3). Aunque reconocemos esa presión creciente de la ciudadanía, Lugo tiene que considerar el poder remanente de las instituciones y formas tradicionales del poder, que al fin fueron las que interfirieron en su proceso de deposición.

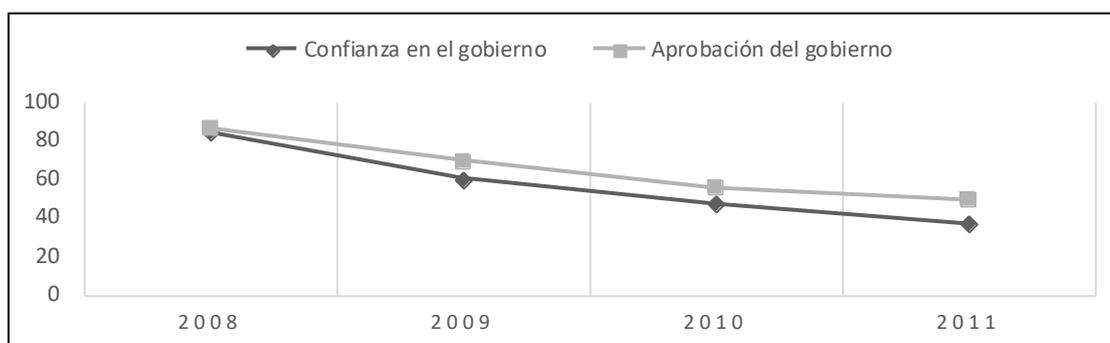
Considerando la presión de parte de la opinión pública por cambios gubernamentales para recuperar la seguridad y la soberanía – las demandas que legitimaron la deposición –, pasamos ahora para los pocos momentos en los cuales Lugo se detiene para analizarlos. Con relación a las tensiones en el campo, Lugo afirma que su gobierno ha buscado “sentarnos en la mesa común y decir, eh, vivimos en el mismo país, construyamos éste país con un modelo también que sea accesible a todos de manera igualitaria” (LUGO, 2016, p. 8). Lugo reconoce la necesidad de una amplia reforma agraria, junto con incentivos paralelos para garantizar la productividad, pero sigue con su retórica

del consenso y de la mediación entre los grupos con intereses confrontantes.

El otro punto de legitimación de la deposición en la opinión pública, la entrega de la soberanía nacional, es un punto muy relacionado con el acercamiento del gobierno Lugo con otros gobiernos latinoamericanos de izquierda y centro-izquierda, una derivación del eterno “cuco del comunismo” que ha caracterizado la dictadura stonista. Según Lugo (2016, p. 12), esa es una “categorización para la exclusión”, que fue creada en la dictadura pero que ya no se relacionaría con la nueva realidad regional y mundial. Sin embargo, reconoce que “el discurso todavía no lo hemos, hay gente que no se, eh, no terminó de asimilar el cambio” (LUGO, 2016, p. 12), y considera que actualmente “se tipifica [...] con el de populismo, estos gobiernos progresistas son más populistas que progresistas” (LUGO, 2016, p. 13).

Aunque reconozca esas dificultades de la visión maniquea, Lugo (2016, p. 12) afirma que

Gráfico 2 - Percepciones de la estructura gubernamental durante el gobierno Lugo (2008-2011)



Fuente: Latinobarómetro (2018)

“la integración regional jugó un rol muy importante, en estar en el concierto de las naciones, primero regionalmente, dejar abierto a otras políticas y a gobiernos solidarios con nosotros, ¿no? Paraguay fue muy beneficiado con la creación del MERCOSUR”. Lugo también confirma que “era casi que mensualmente los ministros del área social de Brasil, de Argentina y de Paraguay, de Uruguay, nos encontrábamos, los presidentes teníamos una agenda bilateral muy importante” (LUGO, 2016, p. 12). Con eso, se ve la importancia que el acercamiento con la región (especialmente con los otros gobiernos del MERCOSUR) ha jugado en su gobierno, precisamente el temor que la coalición conservadora instaló en la opinión pública.

Por fin, cabe analizar las respuestas de Lugo al proceso de deposición a través del juicio político. Primeramente, Lugo (2016) confirma que no creía en la funcionalidad de las instituciones, no creía que se daría un juicio justo. No obstante esa desconfianza, Lugo se sometió al proceso, lo que genera el cuestionamiento del por qué.

Lugo (2016, p. 16) dice que debido al histórico “de violencia, de muertes y de muertes de ciudadanos”, especialmente en el campo, donde se ven campesinos siendo “muertos, solamente porque buscaban tierra propia”. Ante esa conflictividad Lugo se posiciona como “genéticamente [...] pacifista”, agregando que “como obispo yo he visto a la gente morir por la calle, en la calle luchando

por un pedazo de tierra. Estuve recogiendo muertos y sangre de jóvenes campesinos” (LUGO, 2016, p. 16). De tal modo, Lugo reconoce que los conflictos agrarios derivan en mucha violencia y muertes, pero no menciona los problemas enfrentados en el año de 2012, que fueron justamente los eventos que justificaron la deposición, especialmente la masacre de Curuguaty – un evento de conmoción nacional.

Por consecuencia, Lugo ha “prometido personalmente que, en la medida de lo posible, tratar de evitar más muertes y más violencia, especialmente de gente inocente” (LUGO, 2016, p. 16). La personalidad y retórica religiosa de Lugo fueron, según él mismo, elementos que le impidieron de actuar ante la crisis, por temer aún más violencia. Por eso, aunque creyendo que tendría “incluso el respaldo jurídico importante, de reaccionar militarmente al golpe, o juicio político parlamentario”, Lugo se sometió al proceso, pues su reacción “iba a tener un costo social y de violencia y de muerte muy alto que yo no quería cargar en mi conciencia, durante toda mi vida” (LUGO, 2016, p. 16). Creemos que hay que agregar a eso su forma de hacer política, basada en esperar que las partes en conflicto le busquen para una mediación.

Al finalizar su análisis del juicio político Lugo se contradice, en algunos términos, pues le falta la apreciación de la preponderancia de la coalición conservadora. Lugo (2016, p. 16) considera

que se ha “sometido a un juicio sabiendo de antemano que iba a ser un juicio, eh, injusto, un juicio que iba por la destitución, porque la sentencia ya estaba cantada antes de la convocación del proceso, que no se ha respetado el debido proceso”. Pero ¿por qué eso ha pasado? De acuerdo con nuestro análisis previo, debido a la demanda inculcada en la opinión pública de que la deposición de Lugo sería la respuesta adecuada del régimen para solucionar los problemas de inseguridad y entrega de la soberanía nacional. Eso respaldaba la decisión previamente tomada por el Congreso, asimismo la velocidad de los procedimientos.

Cabe analizar en la siguiente sección los efectos de la actuación de Lugo en la crisis para su rol de liderazgo, para su grupo político y para el régimen democrático paraguayo.

EFFECTOS DE LAS RESPUESTAS A LA CRISIS POLÍTICA PARA EL LIDERAZGO Y EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

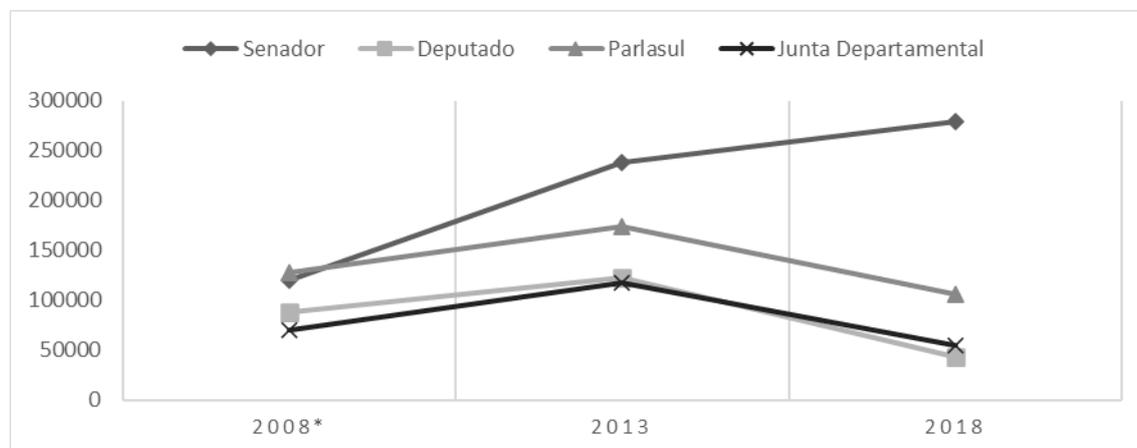
Cuando preguntado acerca del papel de su gobierno en la política paraguaya, Lugo (2016, p. 16) afirma que “la popularidad del gobierno del 2008 al 2012 hoy está tan vigente, cuando la gente creía que nos iban a enterrar con la destitución, que la gente se iba a olvidar, eh, hoy está todavía vigente y la gente lo recuerda”. Según

Lugo eso se debería a algunos logros que el gobierno alcanzó en políticas públicas volcadas hacia los sectores más vulnerables de la población. De ese modo, podríamos decir que Lugo vincula su actuación con los sectores populares y marginalizados de la sociedad, cementando su alejamiento retórico de la coalición conservadora y de sus intereses, lo que motivó incluso su deposición.

Podemos ver esa permanente importancia de Lugo en la política paraguaya con los resultados obtenidos por su agrupación política, el Frente Guasu (FG). En la secuencia presentamos el total de votos obtenidos en las tres elecciones nacionales en los cargos proporcionales, que fueron los principales obtenidos por el FG después de Lugo, asimismo el cuadro con los cargos obtenidos en las elecciones nacionales y municipales.

Después del gobierno Lugo su agrupación política logró aumentar su participación en los cargos electivos, pero cuando miramos el total de votos obtenidos por el FG en los cargos nacionales representativos es posible ver que tan solo el Senado pudo mantener el crecimiento de las votaciones, mientras los otros dos cargos oscilaron. Según estudio previo acerca del rol de Lugo y del FG como tercera fuerza política paraguaya (BOURSCHEID, 2019), después del gobierno la figura de Lugo se consolidó como una de las principales de la política paraguaya, llegando a ser presidente del Senado (2017-2018).

Gráfico 3 - Total de votos del FG en cargos proporcionales



Fuente: TSJE (2013), TSJE (2018)

Donde: *Partidos que hacen parte del FG antes de su formación.

Cuadro 1 - Cargos obtenidos por el FG (total y porcentaje del total de cargos disponible)

Cargo/Elección	2008*	2010	2013	2015	2018
Presidente/vice**	1	-	0	-	0
Senador	2 (4,44%)	-	5 (11,11%)	-	6 (13,33%)
Diputado	1 (1,25%)	-	1 (1,25%)	-	0
Parlasur	1 (5,55%)	-	1 (5,55%)	-	1 (5,55%)
Gobernador/vice**	0	-	0	-	0
Junta Departamental	3 (1,4%)	-	11 (4,82%)	-	12 (5,26%)
Intendente/vice**	-	2 (0,84%)	-	4 (1,68%)	-
Junta Municipal	-	113 (4,28%)	-	167 (6,33%)	-

Fuente: TSJE (2013), TSJE (2015), TSJE (2018)

Donde: * Partidos que participarán del FG (PPS, PHP, PUP e MPT); **Con el primer nombre de la Lista.

Pero ¿por qué Lugo siguió siendo una figura central de la política paraguaya después de ser depuesto? Según él mismo la gente extraña a un gobierno que posibilitó más participación ciudadana. Es posible ver que las movilizaciones sociales que aumentaron durante el gobierno siguieron presionando los gobiernos posteriores

(BOURSCHEID, 2019). Podemos agregar a eso el regreso del modo tradicional de hacer política de la coalición conservadora, con los gobiernos colorados de Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdo Benítez (2018-2023), alejándose de la ciudadanía.

Otro punto a ser analizado es el sentimiento de deuda con Lugo, que parte de la pobla-

ción tenía después de la deposición, considerando que la justicia se hizo de modo sumario (BOURSCHEID, 2019). Juntando esos dos puntos – la vinculación con la movilización social y el sentimiento de deuda – con el reconocimiento público de Lugo, que había sido el presidente, cuando la población piensa en ese gobierno o en el FG hace una vinculación directa con la figura de Lugo. Cuando se analizaron las campañas electorales de 2013 y 2018 fue visto que el mismísimo FG reconoce eso, al posicionar Lugo como la figura central en los materiales de campaña y hasta llamando el equipo de candidatos y candidatas como “equipo de Lugo” (BOURSCHEID, 2019). Es decir, Lugo y el FG lograron ocupar el lugar retórico de los sectores progresistas, de centro-izquierda e izquierda, que hasta ahora se mostró suficiente para permanecer como tercera fuerza de la política paraguaya.

Pero, a partir del análisis hecho en ese estudio, consideramos que un factor importante para comprender la permanencia del liderazgo de Lugo está en la justificativa para la deposición junto a la opinión pública, creada por la coalición conservadora. Con relación a la inseguridad, podemos ver que según el Latinobarómetro (2018) el promedio de respuestas que decían que la seguridad pública era el principal problema del Paraguay durante el gobierno Lugo fue del 21% – el segundo, por debajo del desempleo –, mientras que después del gobierno el promedio bajó para 18,6% - ligan-

do a ser el más respondido en 2015). Es decir, aunque con una oscilación para bajo, no hubo grandes cambios en la percepción ciudadana sobre el problema de la inseguridad.

La gran diferencia es que la movilización campesina después del gobierno Lugo no generó el mismo efecto en la opinión pública, y ahora cuenta con el auxilio de la representación parlamentaria del FG para lograr alcanzar sus objetivos. El EPP siguió existiendo y actuando después del gobierno Lugo, pero también dejó de ser un actor importante en la opinión pública. Y la “entrega de la soberanía nacional” siguió ocurriendo, con la firma del llamado “acta secreta de Itaipu” en 2019 por los presidentes Mario Abdo Benítez y Jair Messias Bolsonaro (Brasil), buscando concesiones paraguayas a los brasileños en la renegociación del Tratado de Itaipu (BOURSCHEID, 2019).

¿Por qué entonces no hubo nuevas deposiciones? Horacio Cartes enfrentó la posibilidad de juicio político después del “marzo paraguayo de 2017”, con las movilizaciones contrarias al intento de reforma constitucional para permitir la reelección y la consecuente represión policial. Y Mario Abdo Benítez enfrentó la misma posibilidad con el “acta secreto de Itaipu”, pero así como Cartes no fue sometido al proceso. La gran diferencia de esos dos casos con Lugo es el apoyo parlamentario y de la coalición conservadora, que Cartes y Benítez lograron negociar para permanecer en el cargo.

Por eso Lugo sigue como una figura central, pues ocupa el espacio que los críticos del modelo hegemónico dejan en la política paraguaya, al ocupar el lugar de liderazgo de una oposición de centro-izquierda e izquierda a la coalición conservadora. Sin embargo, después de analizar las circunstancias de su deposición es posible ver cómo es poderosa esa coalición conservadora, y cómo ella reacciona con poder para lograr sus objetivos. Cabe acordar que dentro del círculo vicioso de la precarización democrática es necesario legitimar la manipulación institucional en la opinión pública, y la vinculación hecha entre Lugo y los problemas de la inseguridad y entrega de la soberanía fue suficiente, en su momento, para la acomodación de intereses y llevar adelante el proceso.

CONSIDERACIONES FINALES

A partir de la propuesta analítica del círculo vicioso de la precarización democrática fue posible comprender el escenario de la crisis política de 2012, que conllevó la deposición del presidente Fernando Lugo a través del juicio político. Las dos clases centrales de demandas que ayudaron a legitimar el proceso de deposición fueron la seguridad pública y la entrega de la soberanía nacional. La primera fue un modo encontrado por la coalición conservadora para caracterizar la vinculación de Fernando Lugo

con los movimientos sociales, especialmente los campesinos. Y la segunda fue una forma peyorativa de caracterizar la cercanía del gobierno Lugo con otros gobiernos de sesgo más de izquierda, los “progresistas”, de Latinoamérica.

La demanda por seguridad pública fue la que tuvo más repercusión en la opinión pública, puesto que se vincula con el círculo vicioso de inestabilidad política (MENDONÇA, 2007). La actuación de Lugo ante la crisis ayudó a respaldar la demanda de la coalición conservadora, aunque fue lo que le ayudó a permanecer como liderazgo importante de la política nacional. Con su postura de esperar por la búsqueda de mediación entre los grupos en pugna, por un lado, resultó en la inmovilidad ante los dos principales eventos conflictivos de 2012 (Ñacunday y Curuguaty), y por otro lado, evitó el estallido de un conflicto abierto más amplio en la sociedad.

Fernando Lugo reconoce las motivaciones de su posicionamiento consensual (especialmente por su pasado personal y de liderazgo religioso) pero no considera todas las implicaciones del escenario inestable que llevó hacia la precarización democrática en la crisis de 2012. La frágil alianza que ganó las elecciones en 2008 resultó en un gobierno con poco soporte institucional, que se convirtió en un problema para responder las demandas de los movimientos sociales que apoyaron la propues-

ta reformista de Lugo, puesto que la retórica de consenso buscaba resolver las demandas a través de las instituciones gubernamentales.

Eso conllevó una creciente movilización social para presionar el sistema político a acoger las demandas de los grupos minoritarios, que reconocieron en ese gobierno una representación política. Pero ese aumento de la movilización fomentó la reacción de la coalición conservadora, sintiéndose amenazada en la permanencia de la seguridad y el orden social para garantizar su extracción de recursos. Aquí adentramos en un tema que Fernando Lugo no ha comprendido completamente en su momento.

La coalición conservadora creó la retórica de la inseguridad pública fomentada por el gobierno Lugo, como visto en el ejemplo de los editoriales de ABC Color, afirmando que Lugo era responsable por la actuación del EPP y por la movilización campesina. Se hizo concreta la retórica maniquea entre seguridad y cambio social, al afirmar que aquellos que buscaban el cambio social en realidad eran conniventes con la inseguridad. La demanda de la coalición conservadora por seguridad jurídica y de propiedad privada se convirtió en la demanda de la opinión pública por la seguridad pública, considerando que para mantenerla era necesario el cambio del gobierno.

De tal modo, con la búsqueda de legitimación en la opinión pública para la precarización

democrática, el resultado fue el siguiente: la deposición de Fernando Lugo era considerada la única forma de solucionar el tema de la inseguridad, lo que resultó en el cambio de gobierno; pero como Lugo y su gobierno fue posicionado como responsable por las movilizaciones campesinas, junto con su postura de mediación en el sistema político, eso resultó en la permanencia de la importancia del liderazgo de Lugo, y el FG se constituyó como representante político de los movimientos sociales afines, especialmente los campesinos.

REFERENCIAS

ABC COLOR. **Cronología del juicio político a Lugo.** 2012a. Disponible en: <http://www.abc.com.py/nacionales/cronologia-del-juicio-politico-a-lugo417040.html>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

_____. **Ñacunday o el resumen de la subversión.** 2012b. Disponible en: <http://www.abc.com.py/edicion-impres/opinion/nacunday-o-el-resumen-de-la-subversion-385295.html>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

_____. **Responsabilidad inexcusable.** 2012c. Disponible en: <http://www.abc.com.py/edicion-impres/editorial/responsabilidad-inexcusable-414967.html>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

_____. **Hoy hace ocho meses que se produjo el violento desalojo**. 2013. Disponible en: <http://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/hoyhace-ocho-meses-que-se-produjo-el-violento-desalojo-539202.html>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

ALCALÁ, Guido Rodríguez. **Ideología autoritaria**. Asunción: Servilibro, 2007.

BAQUERO, Marcello. “Democracia formal, cultura política informal e capital social no Brasil”. In: **Opinião Pública**, 14: 2, noviembre, 2008, pp. 380-413.

BOURSCHEID, Junior Ivan. “Consciência de classe na revolução paraguaia: entre o fracasso luguista e o desvio epepista”. In: **Revista Sem Aspas**, 2: 1/2, enero, 2013, pp. 127-143.

_____. “Entre la hegemonía y el cesarismo: un análisis gramsciano del gobierno de Fernando Lugo (2008-2012)”. In: **Pensamento Plural**, 17, julio-diciembre 2015, pp. 51-76.

_____. **A Frente Guasu e o modelo de dominação paraguaio**: entre adaptação à estrutura governamental e alternativa ao modelo tradicional. Tesis de doctorado en Ciencia Política. Porto Alegre: Universidad Federal de Rio Grande do Sul, 2019.

BOURSCHEID, Junior Ivan; GONZÁLEZ, Rodrigo Stumpf. “Transición y precarización democrática paraguaya: los efectos de la baja calidad institucional y del comportamiento político negativo”. In: **Colombia Internacional**, 98, 2019, pp. 31-65.

BOURSCHEID, Junior Ivan; MARQUES, Rodolfo Silva. “Influencia de la inestabilidad política en la permanencia de la precarización democrática paraguaya”. En: **Contextualizaciones Latinoamericanas**, 15: 27, julio-diciembre, 2022, pp. 117-133.

BOZZOLASCO, Ignacio González. **La encrucijada del cambio**: análisis sobre la realidad social y política del Paraguay contemporáneo. Asunción: Arandurã, 2013.

CAMACHO, Emilio (Compilador). **Golpe parlamentario en Paraguay**: una aproximación jurídica. Asunción: Frente Guasu; Arandurã, 2012.

CASTILLO ESPARCIA, Antonio. “Novos cenários de participação política: análise das estratégias de comunicação dos grupos de pressão (lobbies)”. En: **Organicom**, 8: 14, 1er semestre, 2011, pp. 65-86.

CELI, P. “Más allá del paradigma de la democracia y su desencanto”. In: Bunger, H.-V.; Quintero, R. (eds.). **Conflictos y limitaciones de la democracia en condiciones de pobreza**: América Latina en una perspectiva comparativa. Quito: Ildis, 2007.

CORREIO DO POVO. **Paraguai busca solução para crise com brasiguaios**: sem-terra paraguayos invadiram pelo menos três fazendas de brasileiros. 2012. Disponible en: <http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/?Noticia=389325>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

EASTON, David. **A framework for political analysis**. New Jersey: Prentice Hall, 1965.

EZQUERRO-CAÑETE, Arturo e FOGEL, Ramón. “A coup foretold: Fernando Lugo and the lost promise of agrarian reform in Paraguay”. In: **Journal of Agrarian Change**, 17: 1, 2017, pp. 279-295.

FOGEL, Ramón. “Movimientos campesinos y su orientación democrática en el Paraguay”. In: GRAMMONT, Hubert C. (organizador). **La construcción de la democracia en el campo latinoamericano**. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2006, pp. 95-106.

G1. **JN no Ar mostra tensão entre brasileiros e sem-terra do Paraguai**. 2012. Disponible en: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/01/jno-ar-mostra-tensao-entre-brasileiros-e-sem-terra-do-paraguai.html>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

GAIO, Gabrieli. “A Destituição de Lugo: atores e eventos”. In: **Observador On-line OPISA**, Dossiê Paraguai, 7: 6, junio 2012, p. 4-11.

GLAUSER, Marcos. **Extranjerización del territorio paraguayo**. Asunción: BASE IS, 2009.

GRAMSCI, Antonio. **Cuadernos de la cárcel**: Edición crítica del Instituto Gramsci – Tomo V: Cuadernos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 1. ed. Traducción de Ana María Palos. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Ciudad de México: Ediciones Era, 1999.

LATINOBARÓMETRO. **Latinobarómetro Database**: Análisis Online. 2018. Disponible en: <http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>. Acceso en: 22 de marzo de 2019.

LUGO, Fernando. **Entrevista personal**. 2016.

MENDONÇA, Daniel. **Pobres y desiguales**: notas sobre la pobreza y la desigualdad en Paraguay. Asunción: Intercontinental, 2007.

MORA, Carlos. “Participación y organizaciones campesinas en Paraguay”. In: GRAMMONT, Hubert C. (Org.). **La Construcción de la democracia en el campo latinoamericano**. Buenos Aires: CLACSO, 2006. pp. 343-365.

MUNCK, Gerardo L. "Los orígenes y la durabilidad de la democracia en América Latina: avances y retos de una agenda de investigación". In: **Revista de Ciencia Política**, 30: 3, 2010, pp. 573-597.

MUSSI, C.; AFONSO, J. R. "Cómo conciliar desarrollo económico con bienestar social. Algunas reflexiones sobre los nuevos desafíos latinoamericanos". En: **Revista Nueva Sociedad**, n. 215, mayo-junio, 2008.

PIETSCH, Juliet, MILLER, Michael e KARP, Jeffrey A. "Public support for democracy in transitional regimes". In: **Journal of Elections, Public Opinion and Parties**, 25: 1, 2015, pp. 1-9.

PUTNAM, Robert. **Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna**. Rio de Janeiro: FGV, 1996.

SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalismo, Socialismo e Democracia**. Editado por George Allen e Unwin Ltd. Traducido por Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961.

TSJE, Tribunal Superior de Justicia Electoral. **Memoria y Estadística Electoral 2013**. Asunción: Justicia Electoral, 2013. Disponible en: <http://tsje.gov.py/e2013/documentos/pdf/2013.pdf>. Acceso en: 17 de febrero de 2018.

_____. **Elecciones municipales 2015: Resumen por distrito**. Asunción: Justicia Electoral, 2015. Disponible en: https://tsje.gov.py/static/ups/docs/archivos/2015/noviembre/RESULTADO_PAIS_COMPLETO_2015.pdf. Acceso en: 20 de marzo de 2018.

_____. **Resumen de votos por Departamento 2018**. Asunción: Justicia Electoral, 2018. Disponible en: <https://www.tsje.gov.py/resultados-de-computo-definitivo---elecciones-generales-2018.html>. Acceso en: 17 de agosto de 2018.

Turner, B. **Citizenship and social theory**. Beverly Hills: Sage, 1994.

ULTIMA HORA. **Tibio pronunciamiento del Gobierno sobre conflicto de tierras en Ñacunday**. 2012a. Disponible en: <http://www.ultimahora.com/notas/501570-Tibio-pronunciamiento-delGobierno-sobre-conflicto-de-tierras-en-Nacunday>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

_____. **Colonos brasileños de Ñacunday solicitarán apoyo a parlamentarios de su país**. 2012b. Disponible en: <http://www.ultimahora.com/notas/505718-Colonos-brasilenos-de-Nacundaysolicitaran-apoyo-a-parlamentarios-de-su-pais>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

_____. **Sin tierras aceptan salir de Ñacunday y trasladarse a un parque nacional.** 2012c. Disponible en: <http://www.ultimahora.com/notas/506477-Sintierras-aceptan-salir-deNacunday-y-trasladarse-a-un-parque-nacional>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

_____. **Con palos y machetes, carperos intentaron sitiar Fiscalía de Iruña.** 2012d. Disponible en: <http://www.ultimahora.com/notas/509750-Con-palos-y-machetes,-carperosintentaron-sitiar-Fiscalia-de-Iruna>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

_____. **Las evidencias de Ñacunday.** 2012e. Disponible en: <http://www.ultimahora.com/notas/504506-Las-evidencias-de-Nacunday>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

_____. **Pakova reconoce que carperos obraron mal, pero insta a recuperar franja fronteriza.** 2012f. Disponible en: <http://www.ultimahora.com/notas/498240-Pakova-reconoce-que-carperosobron-mal,-pero-insta-a-recuperar-franja-fronteriza>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

_____. **A 3 meses de masacre em Curuguaty, Fiscalía destaca avances en la causa.** 2012g. Disponible en: <http://www.ultimahora.com/notas/560886-A--3-meses-de-masacre--enCuruguaty,-Fiscalia-destaca-avances--en-la-causa>. Acceso en: 18 de julio de 2018.

NOTAS

¹Es la coalición formada por los partidos tradicionales (Colorado y Liberal), terceras fuerzas momentáneas (como Patria Querida y UNACE), la alianza conservadora (entre el capital multinacional, las asociaciones empresariales nacionales y medios de comunicación empresariales), sectores mayoritarios de la Iglesia y las Fuerzas Armadas.

²Considerando el tamaño de las propiedades paraguayas, centrándose en los dos extremos (las pequeñas propiedades con hasta 50 hectáreas y las grandes propiedades con más de 1000 hectáreas) se observa que las pequeñas propiedades representan 91,2% de las propiedades registradas, pero ocupan un área de tan solo 6,3%. En el extremo opuesto, las grandes propiedades representan 1,6% de las propiedades registradas, pero ocupan un área del 79% (EZQUERRO-CAÑETE y FOGEL, 2017).

³El Portal G1 (2012) en conjunto con el noticiero televisivo “Jornal Nacional” reservaron espacios especiales sobre la situación en Ñacunday, incluso con la visita de un equipo de periodistas en la región, asumiendo la defensa de los propietarios brasileños de Ñacunday. Correio do Povo (2012), vinculado al Portal R7, evidenciaba los intentos del gobierno paraguayo de establecer acuerdos para finalizar el conflicto entre carperos y los brasileños.

⁴Cabe destacar que en 2010 y en 2011 Lugo había decretado estado de sitio por períodos de 30 a 60 días, básicamente en San Pedro y Concepción, permitiendo la actuación sin mandato judicial por parte de las Fuerzas Armadas (BOURSCHEID, 2013).

⁵Se destacan los secuestros de Luis Lindstron entre julio y septiembre de 2008 y el de Fidel Zavala entre octubre de 2009 y enero de 2010, los dos eran ganaderos de la región donde el EPP actuaba.